

que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arceaga.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Simón Guzmán.—Luis Velázquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar*, secretario.

En copia que certifico.—México, Enero 23 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por D. Victoriano Zepeda, contra los procedimientos de la legislatura del Estado, que le ha seguido causa criminal declarando definitivamente que era culpable de varios delitos oficiales cometidos en el desempeño del cargo de gobernador del mismo Estado, y así mismo que había lugar á instruirle causa por el delito de rebelion.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que por recusacion del ciudadano juez propietario de Distrito y escusa de los suplentes del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha venido al conocimiento del de su cargo este expediente formado con motivo del amparo que solicita de la Justicia federal el C. Victoriano Zepeda, contra los actos de la actual legislatura de aquel Estado, de que se dice Gobernador, que ha procedido á enjuiciarlo por la imputacion que le hace de infracciones constitucionales y del delito de rebelion, con cuyos actos considera el quejoso violadas en su persona, las garantías que al hombre otor-

ga la 2ª parte del art. 14 y la 1ª del art. 16 de la Constitucion federal, de 5 de Febrero de 1857, segun lo expresa claramente el apoderado del mismo quejoso en su comparecencia de fojas 28 y exposicion de ocho del actual.

La garantía consignada en la citada segunda parte del art. 14 consiste, como lo expresa el texto constitucional, en que nadie pueda ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley. Si el enjuiciamiento del Sr. Zepeda solo tuviera por origen la rebelion de que se ha hablado dimanada de haber desconocido en siete diputados la facultad de legislar, y las infracciones constitucionales provinieran tambien únicamente de aquel desconocimiento, la violacion de la garantía seria un hecho, como se demostrará en seguida; mas por los justificantes que á su informe sobre lo principal ha adjuntado la legislatura, se advierte que hay ademas otros capítulos de acusacion contra el Sr. Zepeda, nacidos de hechos que, verdaderos ó falsos, aparecen anteriores al 10 de Setiembre del año próximo pasado, desde cuya fecha los siete diputados de aquella legislatura lo tuvieron como rebelde, lo cual hace que la violacion de la garantía aparezca dudosa, ó cuando menos no comprenda los dos puntos porque se reclama, como se verá despues.

Al desconocer el Sr. Zepeda, como gobernador de Coahuila, en siete diputados la facultad de legislar, procedió indudablemente dentro de la esfera de sus facultades constitucionales, supuesto que el art. 67 fracc. 1ª de la Constitucion del Estado, le impone el deber de hacer cumplir las leyes del mismo Estado, autorizándolo para proveer respecto á ellas, lo conveniente á su fiel y exacta observancia, y nadie negará que la Constitucion es la primera y principal de dichas leyes. Tampoco faltó razon ó motivo legal al Sr. Zepeda, para aquel desconocimiento, pues previniendo el art. 47

de la Constitución local de Coahuila, que ningun proyecto de ley se discutirá ni votará no estando presentes, por lo menos, las dos terceras partes del número total; once, es evidente que sus dos terceras partes matemáticamente hablando, vienen á ser siete y un tercio; pero como no es posible la division de una persona, es preciso concluir que para dar cumplimiento á la prevencion del artículo constitucional de que se viene hablando, se necesita la concurrencia de ocho ciudadanos diputados, sin que por otra parte haya razon bastante para disentir que, supuesta la indivisibilidad de una persona, los siete diputados forman el número competente, segun el mismo artículo constitucional, porque él expresamente exige la concurrencia *por lo menos*, de las dos terceras partes. A esta inteligencia del art. 47, no se opone la prevencion del art. 24, que entre otras cosas, expresa que el poder legislativo no podrá depositarse en menos de siete individuos; y no se opone, porque tal prescripcion se refiere al *mínimum* del número total de diputados que el Estado de Coahuila debe nombrar á su legislatura, siendo por lo mismo vario, conforme al art. 47, el número de diputados en quienes reside la facultad de legislar, segun que tambien varíe el total de los que deben ser nombrados para componer el Congreso; así por ejemplo, si en vez de once, como actualmente sucede, el Congreso de Coahuila debiera componerse solo de nueve, aquella facultad desconocida por el Sr. Zepeda en siete diputados, residiría entonces en seis, atendido el precepto del repetido art. 47; de la misma manera, si en vez de nueve á once, el mismo Congreso de Coahuila se compusiera de doce ó quince diputados, habria necesidad de la presencia de ocho ó diez para el ejercicio de la facultad legislativa. En una palabra, lo que relativamente al caso prescribe el art. 24, solo quiere significar que aunque la base para la eleccion de diputados sea la poblacion, segun el art. 28 y por cada 9,000 habitantes deba nombrarse un

propietario y un suplente, en ningun caso el número total puede bajar de siete; mas no que en este número de diputados resida precisamente la facultad de legislar.

Es consiguiente de lo dicho, que el desconocimiento del Sr. Zepeda de la facultad legislativa en siete diputados, no puede constituir delito alguno, ni las consecuencias de tal desconocimiento infracciones constitucionales, pues lejos de ello, el procedimiento de aquel, como gobernador del Estado, aparece conforme con lo que ordena la misma Constitución; así es que sujetarlo á juicio por estos hechos, sería violar en su persona la garantía que otorga la segunda parte del art. 14 del Pacto Federal, pues no debe decirse que se aplican exactamente las leyes en el caso, porque ninguna hay que los defina como delitos, ni por lo mismo que puedan servir de base á un procedimiento, y por esto se dijo antes, que si tales hechos fueran el único fundamento del juicio instaurado contra el Sr. Zepeda, ante la seccion del gran jurado de la legislatura de Coahuila, no habria inconveniente en considerar como un hecho la violacion de la garantía reclamada.

Esto sin embargo, no puede decirse de los otros puntos, que hemos visto, contiene la acusacion formulada contra el Sr. Zepeda, pues en el caso de que ellos sean falsos, indudablemente la demostracion de la falsedad debería hacerse ante la misma legislatura erijida en gran jurado, conforme á los arts. 112 y 113 de la Constitución local, y en el juicio correspondiente, por cuya instauracion no puede decirse que se aplican inexactamente las leyes, porque los hechos de cuyo esclarecimiento se trata, no se encuentran en el caso que los anteriores, pues una vez probados, varios de ellos constituirían verdaderas infracciones constitucionales, lo cual presta los méritos suficientes para el enjuiciamiento.

Pero si la violacion de la garantía consignada en la segunda parte del art. 14, no aparece justificada, á juicio del que suscri-

bo, por lo que mira á la inexactitud con que la legislatura de Coahuila erijida en gran jurado aplica las leyes con el hecho de enjuiciar al quejoso, no puede decirse lo mismo en cuanto á la segunda razon en que se funda la misma violacion alegada, y que consiste, en que dicha legislatura no es tribunal que la ley ha establecido previamente, pues en este punto sí asiste razon al quejoso, lo cual quedará demostrado, patentizándose que la citada legislatura carece de competencia para enjuiciar al quejoso, supuesto que siendo esto así, forzosa-mente se deduce que no será el tribuna, que previamente haya establecido la ley.

La incompetencia que se objeta á la actual legislatura de Coahuila, y por cuya razon se invoca el art. 16 de la Constitucion federal, se hace dimanar de la ilegitimidad de su eleccion.

Supuesta la facultad de la Justicia federal para examinar la legalidad ó ilegalidad de los funcionarios de los Estados cuando en juicios de amparo se alega incompetencia proveniente de aquella causa, veamos si es cierta la ilegitimidad objetada al Congreso de Coahuila.

El art. 61 de la Constitucion local, expresa que la eleccion de gobernador será directa en primer grado; así es que puede decirse muy bien, que la elevacion al cargo de gobernador por otro medio que no sea el de que se acaba de hablar, es un hecho contrario á la Constitucion de Coahuila, y como tal no puede producir investidura legal, supuesto que el Estado conforme al art. 130, no reconoce mas ley fundamental para su gobierno interior que la misma Constitucion, y ningun poder ni autoridad pueden dispensar su observancia, no pudiendo tener valor ni efecto alguno los actos que emanen de un gobernador cuyo carácter no tenga por origen la eleccion popular, conforme al citado art. 61.

La actual legislatura de Coahuila, debe su origen á las convocatorias de 2 de Febrero y 19 de Abril del corriente año, expedi-

das por un gobernador cuya investidura no recibió del modo establecido en el art. 61; y como actos emanados de un gobernador semejante, no han podido producir ningun efecto legal, sino muy al contrario, el anti-constitucional nombramiento de tal gobernador, trae consigo la ilegitimidad de sus actos, entre los cuales deben enumerarse las citadas convocatorias.

El bien inestimable de la paz que con todas sus consecuencias trajo para Coahuila el supremo decreto de 30 de Diciembre de 1873, que nombró un gobernador provisional, no le quita el carácter de anticonstitucional que en sí tiene, porque pugna abiertamente con los arts. 40, 41, 109 y 126 de la Constitucion federal. Por consiguiente, este gobernador provisional, nombrado contra las prevenciones de la Constitucion particular de Coahuila, no ha podido legalmente funcionar como gobernador: las convocatorias que expidió para la eleccion de diputados son ilegales, lo mismo que la misma eleccion, como actos emanados de un poder ilegal.

Ahora bien, garantizando el art. 41 de la Constitucion federal el ejercicio de la soberanía de los Estados, siempre que se sujete á los términos establecidos en sus Constituciones particulares, no habiendo sido nombrados los actuales diputados de Coahuila conforme á lo establecido en su Constitucion particular, supuesto que para su eleccion se expidieron convocatorias por un gobernador anticonstitucional, es claro que no pueden tener el carácter de diputados, ni pueden por lo mismo, sea cual fuere su número, formar una legislatura legal. Y siendo así, con mayoría de razon debe negarse á tal legislatura toda competencia, supuesto que para que esta pudiera concebirse, sería preciso que existiera la legislatura, lo que no puede decirse cuando se ha visto que es ilegal.

En consecuencia, la citada legislatura al erijirse en gran jurado para juzgar al C. Gral. Victoriano Zepeda, viola en su perso-

na la garantía que otorga la primera parte del art. 16 de la Constitución federal de 5 de Febrero de 1857, y como consecuencia, la otorgada en la segunda parte del art. 14, pues no puede decirse entonces que la citada legislatura sea el tribunal que previamente ha establecido la Constitución de Coahuila en sus arts. 112 y 113, para juzgar á los funcionarios de primer orden, de los cuales es uno el gobernador.

Por todo lo expuesto y fundado en el art. 12 fracc. 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, concluye el promotor con la proposición siguiente:

Única. La Justicia de la Union ampara y protege al C. Gral. Victoriano Zepeda contra los actos de la legislatura de Coahuila que pretende enjuiciarlo.

Monterey, 10 de Agosto de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Es copia que certifico. Monterey, 27 de Agosto de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Monterey, Agosto 22 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Victoriano Zepeda, como gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, por violacion de varias de las garantías que le otorga la Constitución general, contra algunos de los poderes; explicando y precisando despues su queja, refiriéndola á los actos de la legislatura del mismo Estado, por los que, erigida en gran jurado, lo sometió á juicio declarando al fin por un veredicto: que era culpable por varios delitos oficiales, y que habia lugar á formacion de causa por el de rebellion, al desconocer al Poder Legislativo, convocado á sesiones extraordinarias á mediados del año de 1873; porque con esas resoluciones se violaron en su persona las garantías que le acuerda el Código fundamental en su art. 16 y parte segunda del 14; en virtud de que la legislatura que lo juzga, es ilegítima ó incompetente, por proceder su nom-

bramiento de la intervencion anticonstitucional del Congreso de la Union, al dictar su decreto de 30 de Diciembre último, disponiéndose se nombrara un gobernador provisional, invadiéndose así la soberanía del Estado; y porque se ha llamado rebellion á su desconocimiento á la legislatura, que no lo era por falta de quorum, cuando eso es verdaderamente una cuestion constitucional, apoyada por su parte en el dictámen de personas respetables en la ciencia del derecho, y que no puede constituir aquel delito; habiéndose, en consecuencia, aplicado inexactamente las leyes al hecho, y necesitándose dictar una ley con posterioridad para poderlo calificar como delito.

Visto lo expuesto por la honorable legislatura, en que manifiesta: que es competente segun las leyes del Estado, para juzgar como jurado de acusacion al Sr. Zepeda por sus delitos oficiales y comunes, como gobernador: que el Congreso de la Union, en virtud de las circunstancias en que se hallaba Coahuila, tuvo facultades por la Constitución, para dictar su decreto de Diciembre que fué recibido por todo el Estado como una medida salvadora, que trajo los inestimables bienes de la paz; que el delito de rebellion del Sr. Zepeda, está bien calificado, porque segun la Constitución de Coahuila y la interpretacion que se le ha dado, siete diputados forman quorum; y que á dicho gobernador se le ha juzgado no solo por la rebellion, sino por otros varios delitos, declarándose que es culpable por algunos de ellos, y que ha lugar á formacion de causa por el de rebellion; sin que importe esto último una sentencia, y sin que tampoco pueda decirse que se ha aplicado mal la ley, no habiéndose violado, por tanto, las garantías de los arts. 16 y 14 de la Constitución.

Vistos los documentos é impresos presentados por la legislatura y el quejoso. Visto lo expuesto por el ciudadano promotor fiscal, en que pide: que se declare que ha lugar al amparo solicitado por el Sr. Ze-

peda, por haberse violado en su persona las garantías de que hace mérito. Y visto, en fin, todo lo que consta en este expediente.

Y considerando, sobre si el Congreso de la Union tuvo facultades, segun el Código fundamental, para dictar su decreto de Diciembre, ordenando que se nombrara un gobernador provisional en Coahuila:

Primero: Que el poder Ejecutivo del Estado desconoció como legislatura á siete de los diputados, porque á su juicio no formaban quorum para dictar leyes y decretos, y en esa virtud el Congreso destituyó al gobernador, nombrando otro interino; formándose así dos partidos, que llevaron esa cuestion constitucional al terreno de las armas, librándose varios combates entre los beligerantes, excitándose cada dia mas y mas las pasiones de unos y otros, y abandonando todos sus ocupaciones comunes para dedicarse á la guerra.

Segundo: Que tal situacion trajo, como un consiguiente necesario, las expropiaciones, los servicios forzados, las exacciones extraordinarias, y todas las consecuencias de una guerra asoladora, que convirtió al Estado en un campo de batalla.

Tercero: Que siendo tan anómala la situacion de Coahuila, giraba fuera del orden constitucional, y hasta cierto punto, se separaba de la Federacion.

Cuarto: Que los poderes supremos no podían ser indiferentes á situacion tan extraordinaria, cuando todos los Estados deben adoptar para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo popular, art. 109 de la Constitucion.

Quinto: Que los mismos Estados forman una federacion, segun los principios establecidos en la ley fundamental, sin que en ningun caso puedan contravenir á sus prescripciones, arts. 40 y 41; y en Coahuila dejaron de observarse, con motivo de la guerra.

Sexto: Que segun el espíritu del art. 128 de la Constitucion, los poderes supremos de la República deben velar porque no

sea interrumpida, y dictar las providencias oportunas para que se restablezca su observancia en todos y en cada uno de los Estados que forman la federación; y á ninguno mejor que al Congreso general, convenia que lo hiciera.

Sétimo: Que dicho poder tiene derecho para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas sus facultades, entre las que está la de declarar la guerra á cualquiera nacion, y con mayor fundamento para pacificar uno de los Estados de la República, art. 72, fracciones 14 y 20.

Octavo: Que la Nacion, que está representada por los poderes supremos, tiene obligacion de conservarse á sí misma, é igualmente á todos sus miembros, que son los Estados y sus ciudadanos en particular; porque debilitadas y destruidas las partes que la componen por una guerra local, se debilitaria tambien ella, Vattel, derecho de gentes, lib. 1.^a, cap. 2.^a, § 17; y por lo mismo, tenia el deber de pacificar y de que se conservara Coahuila, dictando las medidas convenientes para que no se destruyera.

Noveno: Que los mismos poderes están obligados á proteger á los Estados en caso de un trastorno interior, siempre que sean excitados por la legislatura respectiva, ó por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida, art. 116 de la Constitucion; de manera, que habiéndoselos pedido igual auxilio tanto por aquella como por éste, que no la consideraba reunida, pudieron decidir de parte de cuál de los dos solicitantes estaba la justicia y el derecho, para proteger al que conviniera, y poner así término á la guerra por ese medio.

Décimo: Que si estaban facultados para pacificar al Estado, aún destruyendo uno de los partidos beligerantes, lo estaban tambien para adoptar los medios que condujeran al fin; porque al que se le facultaba para llevar á buen término un negocio, debe dársele derecho tambien para usar de

los medios prudentes y necesarios, supuesto que de otro modo se le exigiría una cosa imposible; y el congreso adoptó como mejor, el medio equitativo de que se nombrara un gobernador provisional, para conseguir la paz, que no buscarla por el recurso estrepitoso de las armas.

Décimo primero: - Que la soberanía de los Estados no es ni debe entenderse para que dejen de observar la Constitución general, ni para que puedan destruirse por medio de una guerra intestina, con perjuicio de la nación de que forman parte.

Décimo segundo: Que de todo esto se deduce: que los poderes de la Unión tuvieron facultad para dictar su decreto de Diciembre; siendo en consecuencia legítima y competente la legislatura de Coahuila para someter á juicio al gobernador, lo que tambien es conforme á lo dispuesto en los arts. 112 y 113 de su Constitución.

Considerando, en cuanto al otro punto de si se han aplicado las leyes con exactitud al hecho que se ha llamado rebelion:

Que el desconocimiento de la legislatura por el Ejecutivo, fué una cuestion constitucional, nacida de los términos dudosos del mismo Código, el cual dá lugar á que pueda interpretarse en uno y otro sentido, habiendo razones poderosas en pró y en contra; de manera, que no puede tenerse como delito de rebelion el desconocimiento á la legislatura.

Que aunque algunas veces ha abierto sus sesiones el mismo Congreso con menos de dos tercios de sus diputados, no pueden tenerse estos hechos como una interpretacion ó aclaracion constitucional; porque las leyes se reforman, aclaran ó intepretan con los mismos requisitos que se forman, conforme á la segunda parte del art. 47 de la Constitución particular; de modo que para interpretarla ó aclararla, deben guardarse las mismas solemnidades que prescribe el art. 127, y esto no se hizo con aquellos hechos.

Que no obstante que en 5 de Junio últi-

mo se dictó el decreto n.º 180 diciéndose: que segun la interpretacion que se habia dado al Código particular, siete diputados formaban quorum para expedir leyes y decretos; sin embargo, para dar tal decreto, que es aclaratorio de la Constitución, no se tuvo presente lo dispuesto en el expresado art. 127, ni puede retrotraerse á los hechos pasados, ni surtir efecto alguno respecto de ellos.

Que las leyes sin distincion deben aplicarse exactamente al hecho, ya sea para condenar ó ya para declarar que ha lugar á proceder, porque esto equivale al auto de prision y á la suspension del cargo que se ejerce, para lo cual debe haber fundamento, art. 16 de la Constitución; y en el caso se ha dado el nombre de rebelion á un hecho que no constituye ese delito, y sobre lo que ha expuesto razones de mucho peso el ciudadano promotor fiscal en su pedimento, habiéndose aplicado, por tanto, inexactamente la ley, y violándose la garantía que otorga el art. 14 en su segunda parte.

Que la rebelion, aunque sea contra los poderes locales, afecta al órden público de la Nación, y es un delito en contra de ella, que está sujeto á sus leyes y tribunales, como se han dado ya algunas ejecutorias.

Que la ley de 6 de Diciembre de 1856 para castigar los delitos contra la Nación, contra el órden y la paz pública, y el Código penal, son leyes federales, á las que, en su caso, estaría sujeto el Sr. Zepeda si hubiera cometido el delito de rebelion.

Que los gobernadores de los Estados son responsables, por infraccion de la Constitución y leyes federales, ante la misma nación; y entonces la autoridad competente para declarar si hay culpabilidad, ó si ha ó no lugar á formacion de causa, es el Congreso de la Unión, y no la legislatura del Estado, arts. del 103 al 105 del Código fundamental y

Considerando, por último, cuanto considerar convino, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, con lo pedido en par-

te por el ciudadano promotor fiscal, y con el artículo 101 de la Constitución y ley de 20 de Enero de 1869, el ciudadano Juez de Distrito de Nuevo Leon, definitivamente juzgando dijo:

Primero: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Victoriano Zepeda contra los actos de la legislatura de Coahuila, por los que lo sujetó á juicio, como gobernador constitucional, declarando que era culpable por varios delitos oficiales.

Segundo: Que la misma Justicia federal ampara y protege el expresado Sr. Zepeda, contra los actos de dicha legislatura, por los que lo sometió á juicio, diciendo por su veredicto: que habia lugar á formacion de causa por el delito de rebellion.

Notifíquese, publíquese esta sentencia en el periódico oficial de este Estado, sáquense las copias de estilo, y remítase el juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El expresado ciudadano juez, así lo decretó y firmó por ante mí el secretario: Doy fé.—*Lic. F. Valdés Gómez.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterrey, Agosto 27 de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 31 de 1874.

Visto el recurso de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Coahuila, por D. Victoriano Zepeda, contra los procedimientos de la legislatura del Estado, que le ha seguido causa criminal declarando definitivamente que era culpable de varios delitos oficiales cometidos en el desempeño del cargo de gobernador del mismo Estado, y así mismo que habia lugar á instruirle causa por el delito de rebellion, cuyos procedimientos y resoluciones, segun manifiesta el quejoso, emanan de una autoridad establecida con infraccion del art. 116 de la Constitución de la República, y vulneran á su

perjuicio las garantías consignadas en los arts. 14 y 16 del mismo Código; y

Considerando: que las infracciones constitucionales se hacen consistir:

Primero: En la intervencion de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Union en el régimen interior del Estado, con motivo del decreto expedido por el Congreso federal en 30 de Diciembre de 1873, que dispuso se nombrara por el Ejecutivo, un gobernador provicional encargado de restablecer el orden constitucional en Coahuila: á cuyo decreto debe su existencia la legislatura actual del Estado, debiéndose tener en consecuencia como ilegítima é incompetente para proceder en juicio criminal contra el quejoso.

Segundo: En la falta de causa legal que justifique los procedimientos de la legislatura; y por último, en la aplicacion inexacta que se ha hecho de las leyes, declarando delito de rebellion, la negativa del Sr. Zepeda de reconocer como legalmente instalados en Congreso, un número de diputados insuficiente, en su opinion, para el efecto.

Considerando con respecto al primer punto: que el mismo Sr. Zepeda en su calidad de gobernador, dió entero cumplimiento al decreto de 30 de Diciembre de 1873, sin poner objecion alguna con este motivo; y que igualmente fué aceptado y obedecido por las demas autoridades y habitantes del Estado: que en virtud de esta aquiescencia general, se procedió á la eleccion de diputados al Congreso local, por cuyo motivo no se puede considerar como ilegítimo este poder, siendo como lo es, la expresion del voto popular emitido libremente.

Considerando por lo tocante al segundo punto: que no aparece justificada la infraccion del art. 16 constitucional en la parte que exige en todo mandamiento proveniente de una autoridad, se exprese por escrito la causa legal del procedimiento.

Considerando en cuanto al cargo de rebellion, que se ha hecho al quejoso: que no se puede reputar como un delito de esa clase,

la oposicion en reconocer como legales los actos de los siete diputados reunidos en congreso; y que por lo mismo con el veredicto de la legislatura declarando haber lugar á la formacion de causa contra el Sr. Zepeda por el delito de rebellion, se ha vulnerado la garantía que contiene el art. 14 constitucional en la parte que previene, que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al caso.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 22 de Agosto del año pasado por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, á cuyo conocimiento pasó este negocio por las diversas escusas y recusaciones de los jueces propietario y suplentes de Coahuila, y que declaró:

Primero. Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Victoriano Zepeda, contra los actos de la legislatura de Coahuila, por los que lo sujetó á juicio como gobernador constitucional, declarando que era culpable por varios delitos oficiales.

Segundo. Que la misma justicia federal ampara y protege al expresado Sr. Zepeda contra los actos de la legislatura por los que lo sometió á juicio, diciendo por su veredicto que habia lugar á formacion de causa por el delito de rebellion.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velazquez.*

TOMO VII.—PARTE II.

—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

El que suscribe certifica: Que los ciudadanos Magistrados Juan J. de la Garza y Manuel de Castañeda y Nájera asistieron á la votacion del presente negocio; pero no lo firmaron, porque, en esta fecha en que se pone en limpio la anterior sentencia, ya no existen, pues el primero salió para Guatemala, y el segundo murió en Agosto del año pasado.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 28 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Juan Francisco Arriola, contra el acto del tesorero de aquel Estado, que ejecutivamente le exige el pago de doscientos veintidos pesos de alcabálas por la introduccion de veinticinco tercios de cacao.

SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

Puebla, 4 de Noviembre de 1874.—Visto el ocurno presentado por el C. Juan Francisco Arriola, en que solicita el amparo de la Justicia federal contra la providencia ejecutiva dictada por el ciudadano que funge de Tesorero del Estado, por la que se le exige el pago de derechos, importantes 222 pesos, por introduccion á esta plaza de 25 tercios de cacao, fundando el recurso, en que el procedimiento en cuya virtud se ha embargado ese efecto, viola la garantía otorgada en el art. 16 de la Constitucion general, violacion que el quejoso deduce de varios capitulos, y son:

1º: No existir actualmente en el Estado leyes ó disposiciones que legalmente esta-